



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-011(024)-2019-00396-01
Demandante:	Luis Alfonso Gutiérrez, María Cecilia Guerra Muñoz
Demandado:	Porvenir S.A.
Litisconsorte necesario:	Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes, dependencia económica padres.

**Medellín, marzo catorce (14) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de

Porvenir S.A., respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de diciembre de 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por los señores LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ y MARÍA CECILIA GUERRA MUÑOZ en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., proceso al cual fueron vinculados el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Radicado 05001-31-05-011-2019-00396-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

Los señores LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ y MARÍA CECILIA GUERRA MUÑOZ convocaron a juicio a PORVENIR S.A., pretendiendo se declare que su condición de padres del afiliado Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, les asiste el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes; se declare que, en aplicación del principio de universalidad e integralidad, Porvenir S.A., tiene la obligación de sumar el tiempo de servicio militar obligatorio para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes. En consecuencia, se condene a Porvenir S.A, al reconocimiento y pago de la prestación económica a partir del 4 de enero de 2017, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o subsidiariamente, la indexación.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que el joven Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, quien prestó servicio militar obligatorio entre el 03 de octubre de 2013 y el 13 de septiembre de 2014, falleció el 4 de enero de 2017 por causas de origen común, razón por la cual, los demandantes, en su condición de padres solicitaron el reconocimiento de la pensión de

sobrevivencia el 27 de marzo de 2018, prestación que les fue negada mediante oficio del 5 de julio de 2018, autorizando la devolución de saldos, frente a la cual no se ha efectuado gestión alguna, ni se ha recibido dineros.

Se relató que, de la historia laboral del afiliado fallecido, se tiene que entre el 16 de diciembre de 2014 y el 04 de enero de 2017, contaba con 35 semanas cotizadas, las cuales sumadas al tiempo de servicios a través del Ministerio de Defensa, totalizan 70.13 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento.

Continuó señalándose que Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, era soltero, sin hijos, que era una persona hogareña, que aportaba al sostenimiento de los demandantes, dado que la señora María Cecilia se ha dedicado a las labores del hogar y el señor Luis Alfonso ha laborado en el sector informal como jardinero, de ahí que el aporte del hijo era esencial para la subsistencia de sus padres.

Finalmente, se adujo que, para la fecha del fallecimiento de Andrés Felipe, grupo familiar esta compuesto por este, los demandantes y seis hermanos, que luego del fallecimiento del afiliado presentan una precaria situación económica, además de que debieron trasladarse a la ciudad de Medellín en condición de desplazamiento.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

**PROTECCIÓN S.A.** al replicar la demanda admitió como cierto que los accionantes solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia y que la misma fue negada por cuanto no se dejó causada, pues el afiliado fallecido solo cotizó 34.2 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento, asimismo, sostuvo la entidad, que no es cierto lo relacionado con el número de semanas

cotizadas por el fallecido, teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa en el aplicativo de la OBP, certificó 8 días laborados, los cuales se reflejan en la liquidación provisional del bono pensional, correspondientes al periodo 2013-10 y sobre los cuales pagó en noviembre 30 de 2018, la suma de \$27.000, resaltando además que el tiempo de servicio militar según el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, solo es computable para las pensiones de vejez. Finalmente, destacó que no es cierto que los demandantes dependieran económicamente del causante y que no le consta las restantes afirmaciones.

A su vez, propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda; buena fe; prescripción; incumplimiento de los requisitos legales para acceder al pago de la prestación y ausencia de derecho sustantivo; compensación; falta de causa en las pretensiones de la demanda; afectación a la sostenibilidad financiera y la innominada o genérica.

Por su parte, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, quien fue citado al proceso como litisconsorte necesario por pasiva, señaló que es cierto que Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, prestó servicio militar entre el 3 de octubre de 2013 y el 13 de septiembre de 2014 y que falleció el 4 de enero de 2017, señalando no constarle los demás hechos por ser ajenos a la entidad. Se opone a las pretensiones, aunque aclara que no están dirigidas contra el Ministerio y formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Finalmente, el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, aceptó como cierta la prestación del servicio militar y fecha del fallecimiento del afiliado, sin constarle los demás hechos, toda vez que se refieren a otras entidades. En oposición a las pretensiones formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y la oficina de bonos

pensionales OBP no es ni emisor ni cuotapartista en el bono pensional del demandante.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 9 de diciembre de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que Luis Alfonso Gutiérrez y María Cecilia Guerra Muñoz, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de su hijo, Andrés Felipe Gutiérrez Guerra el 4 de enero de 2017, en consecuencia, condenó a Porvenir S.A., a reconocer y pagar a los demandantes la prestación económica a partir del 4 de enero de 2017, en cuantía de un smlmv y en proporción al 50% para cada uno, en razón de 13 mesadas anuales y sin perjuicio del incremento anual que determine el Gobierno Nacional, liquidando como retroactivo pensional causado a partir del 4 de enero de 2017 y hasta el 30 de noviembre de 2022 la suma de \$64.660.480, monto que se pagará indexado, autorizando descontar los aportes al sistema de seguridad social en salud; absolvió a Porvenir S.A., de los intereses moratorios: declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Defensa Nacional, e impuso condena en costas a cargo de Porvenir S.A.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de Porvenir S.A, presentó recurso de apelación, mediante el cual solicita se revoque la sentencia, argumentando que en relación con la causación de semanas se evidenció que hay un bono que se pagó por valor de \$27.000 correspondiente a 8 días, indicando el Ministerio de Hacienda que la vinculación de Andrés Felipe se dio para el 10 de octubre de 2013 y que por ende no se podía dar ningún otro bono pensional, siendo la iniciación del

servicio militar 8 días antes de la afiliación a Porvenir S.A., estando claro que en la cuenta de ahorros del afiliado no están esas otras semanas, de ahí que la excepción que declaró probada la juez de primera instancia no podía darse, porque allí hay una responsabilidad o del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Hacienda en relación con ese bono.

Refirió que conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, los tiempos de servicio militar, solo se deben tener referenciados para la causación de la pensión de vejez y jurisprudencialmente es interpretado que la invalidez y la sobrevivencia, son riesgos diferentes al de la vejez.

Respecto del reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, estima que no se probó la dependencia económica, reprochando que la juez le dio mayor valor probatorio a la prueba testimonial que a lo confesado por los demandantes en el interrogatorio de parte, resaltando que confesamente se indicó que el señor Andrés Felipe no tenía un trabajo ininterrumpido en el tiempo, que cuando él mismo no trabajaba, el señor Luis era quien velaba por las necesidades del hogar, la señora María Cecilia indicó que, cuando no trabajaba ellos determinaban su subsistencia, por lo que el aporte no modificaba el mínimo vital de la familia, por ende no hay lugar a una pensión de sobrevivientes, resaltando igualmente, que el demandante claramente dijo que era su otro hijo José Daniel quien le daba sagradamente ese aporte para el mercado.

Sostuvo que en ningún momento quedó determinado, cuantos eran los gastos del hogar, que valor ingresaba al hogar, para hablar de la carencia de ese aporte, porque incluso agregaron que la casa donde vivían, no era arrendada, servicios públicos no pagaban y el mercado se los pagaba José Daniel, ahí por ende entonces no es posible acreditar una dependencia económica, llamando la atención que la juez hizo alusión a que el traslado que se da del municipio de Ebejico a Medellín fue con una connotación económica, cuando el mismo

demandante confesó que fue por situaciones al margen de la ley, con ocasión del fallecimiento de su hijo, incluso se confesó que este murió laborando.

Reseñó que los testigos, especialmente el señor Anderson tiene serias inconsistencias en su declaración, solicitando se realice una valoración de la prueba, pues se hacen afirmaciones subjetivas que no están de acuerdo con la realidad, incluso el testimonio es contrario a lo confesado por la parte actora, por lo que debe descartarse, aduciendo que a la testigo Marta Sánchez, no le consta nada de manera presencial, es una testigo de oídas en lo que tiene que ver de la dependencia económica, porque manifestó que no sabe cuánto pagan de servicios públicos, no sabe cuánto les valía el mercado, no le consta nada.

Finalmente, en cuanto a las costas, resalta que se absolvió a la entidad de los intereses moratorios, por encontrar que había una causal para negar el reconocimiento de esa prestación económica, también aplicable a las costas y que Porvenir S.A., siempre actuó de buena fe.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de Porvenir S.A., insistiendo en la revocatoria de la sentencia, reiterando para ello, lo señalado tanto al momento de presentar alegatos en primera instancia, como en la sustentación del recurso de alzada, en relación a que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho, por no reunir los 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores al fallecimiento, sin que pueda computarse el tiempo de la prestación del servicio militar y por cuanto no quedó acreditada la dependencia económica, incumpliendo la activa con la carga de la prueba.

## **2. CONSIDERACIONES**

## **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el joven Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, quien nació el 24 de julio de 1994, era hijo de los señores María Cecilia Guerra Muñoz y Luis Alfonso Gutiérrez, conforme al registro civil de nacimiento, visible a folios 47 del anexo 03 del expediente digital.
- Que Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, prestó servicio militar obligatorio, entre el 03 de octubre de 2013 y el 13 de septiembre de 2014.
- Que el joven Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, falleció el 4 de enero del 2017, tal y como informa la copia del registro civil de defunción visible a folios 33, del anexo 03 del expediente digital.
- Que el causante cotizó 35 semanas, tal como se desprende de la historia laboral emitida por Porvenir S.A., militante en el anexo 28 del expediente digital.



- Que el joven Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, prestó servicio militar obligatorio entre el 03 de octubre de 2013 y el 13 de septiembre de 2014, véase documento glosado a folio 6 del anexo 41 del expediente digital.
- Que los señores Luis Alfonso Gutiérrez y María Cecilia Guerra Muñoz, solicitaron el 27 de marzo del 2018 a Porvenir S.A., el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, recibiendo respuesta negativa mediante comunicación del 05 de julio de 2018, así se desprende del documento obrante a folio 28 del anexo 03 del expediente digital.

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, absolver a Porvenir S.A., de la totalidad de las pretensiones de la demanda, determinando para tal fin (i) si es procedente computar el tiempo en que el causante prestó el servicio militar obligatorio, con las semanas cotizadas a efectos de acreditar la causación de derecho a la pensión de sobrevivencia, (ii) si los señores LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ y MARÍA CECILIA GUERRA MUÑOZ, acreditan la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivencia causada con ocasión del fallecimiento de su hijo, Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, ocurrido el 4 de enero de 2017?

### **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) es posible tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar

obligatorio, a efectos de verificar la causación del derecho a la prestación económica de sobrevivencia, no obstante (ii) los demandantes no acreditan la dependencia económica respecto de su hijo fallecido Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, y, por lo tanto, no son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. En consecuencia, la sentencia debe ser REVOCADA.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

Tal y como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (véase las sentencias CSJ SL36135-2009, SL42828 -2011, SL7358-2014, SL1503-2018, SL2843-2021, entre otras).

Por lo anterior, y toda vez que el deceso de Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, tuvo lugar el 4 de enero de 2017, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, los cuales consagran los requisitos para causar la pensión de sobrevivientes y los beneficiarios de la misma, así:

El Artículo 12 de la Ley 797 del 2003 dispone:

*“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: ...*

*2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:”*

A su vez el Artículo 13 de dicho estatuto, define como beneficiarios de la prestación a:

*Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*(...)*

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”*

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso que concita la atención de la Sala, debe determinarse en primer lugar, si el afiliado fallecido, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivencia, esto es, si cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento, encontrando que la historia laboral allegada al plenario reporta un total de 35 semanas cotizadas en toda la vida laboral, cotizaciones reunidas entre octubre del año 2014 y enero de 2017, densidad de semanas que resulta insuficiente para causar el derecho.

Asimismo, pretende la activa se tenga en cuenta a efectos de acreditar las 50 semanas, el tiempo en el cual el joven Andrés Felipe Gutiérrez Guerra, prestó servicio militar obligatorio, estando acreditado que ello tuvo lugar, entre el 03 de octubre de 2013 y el 13 de septiembre de 2014, hallando esta Sala de Decisión Laboral, que acertó la a quo, al determinar que si era posible tener en cuenta dicho periodo, y bajo tal circunstancia, se tiene que el causante acredita 69.14 semanas en los tres años anteriores al deceso, dejando causado el derecho a la prestación económica.

Sobre este punto, menciona esta Magistratura que no es de recibo el argumento expuesto por el apoderado de Porvenir S.A., según el cual, solo es posible considerar el tiempo del servicio militar obligatorio tratándose de pensiones de vejez, pues ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en señalar la viabilidad de

computar el tiempo de prestación del servicio militar con las semanas cotizadas, no solo para efectos de determinar la causación de pensiones de vejez, sino también respecto de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, ello atendiendo a los principios de universalidad e integralidad, sin que pueda admitirse una interpretación restrictiva al artículo 40 de la Ley 48 de 1993.

Al respecto, en sentencia SL 11188 del 3 de agosto de 2016, se concluyó:

*“Desde este punto de vista, a juicio de la Sala, la mejor solución interpretativa es aquella según la cual el art. 40 de la L. 48/1993, no solo cubre las pensiones de jubilación o vejez, sino también las de sobrevivencia e invalidez, en el entendido que la protección en pensiones que ofrece la L. 100/1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidez y muerte; de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad”.*

Posición que ha sido reiterada en sentencias como la SL2402 de 2021, la SL1584, SL1965, SL3958 y SL1429 de 2022

Se sigue de lo anterior, entrar a determinar si los demandantes, en su condición de padres del afiliado fallecido, tienen la calidad de beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, ello en relación con el requisito de dependencia económica.

Parte la Sala de la premisa jurídica, que la dependencia económica, como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C111 de 2006 y lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en innumerables fallos, no requiere ser absoluta, véase al respecto las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014 y SL6390 de 2016, sin que ello signifique, que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, de manera que si bien pueden percibir ingresos

adicionales, estos deberán ser insuficientes para garantizar la independencia económica.

En sentencia SL10251 de 2017, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recordó que el aporte del causante debe ser de una entidad considerable para configurar dependencia:

*“En relación con la acusación presentada en el segundo cargo orientado por la vía directa, en cuanto a la interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en punto al entendimiento que debe darse al requisito de dependencia económica, puede verificarse que la sentencia de segundo grado, admitió que no se exige que la dependencia sea total y absoluta, sino que tenga la connotación de subordinación respecto de otra persona o la necesidad de auxilio o protección de otra”*

*“Intelección que atiende los planteamientos que sobre este asunto ha sostenido esta Corporación, pues ha sido criterio reiterado, que la dependencia económica se establece en cada caso particular, sin que la misma sea total y absoluta, pues lo que ha de probar es que se derive de una contribución por parte del causante, que se acredite como relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del demandante, y que pueda configurar subordinación económica que se requiere para adquirir la condición.”*

La anterior postura jurídica se itera en sentencia de la misma corporación, SL1243-2019 (68336) del 27 de marzo del 2019, en la que se enfatiza que la dependencia económica no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, pero tampoco puede entenderse que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “buen hijo”, siempre sea indicativo de una verdadera dependencia económica:

*“Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de*

*configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).*

*Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley...”*

Relieva la Sala que la dependencia económica de los padres respecto de los hijos, como lo ha establecido la Corte Constitucional y la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general. Igualmente, es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo de los padres, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

En el sublite, analizada la prueba obrante en el plenario, el interrogatorio de parte rendido por los accionantes y la prueba testimonial recaudada, advierte este Juez Plural, que le asiste razón al alzadista al afirmar que no se acreditó la dependencia económica, motivo por el cual dista esta Sala de la conclusión a la cual arribó la funcionaria de primera instancia, lo anterior atendiendo a lo siguiente:

En primer lugar, se tiene que la señora María Cecilia Guerra Muñoz, al rendir interrogatorio manifestó que su compañero Luis Alfonso es jardinero, que de vez en cuando le resulta trabajo, que, para el momento del fallecimiento de su hijo, vivían en Ebejico, que vivían en una casa prestada, no pagaban arriendo, no pagaban servicios públicos, manifestó no saber cuánto ganaba su hijo, que

él le ayudaba con el mercadito, que para esa fecha también trabajaba otro de sus hijos José Daniel, quien también ayudaba con mercado, que en igual sentido, su compañero colaboraba con el mercado y para el estudio de los hijos, siendo igualmente su compañero quien le daba todo lo de aseo personal y vestido, que su hijo Andrés Felipe trabajaba unos días y cuando no tenía trabajo los gastos de la casa los asumía ella con su compañero, manifestando que cuando Luis Alfonso trabajaba en Medellín y se demoraba 8 días, era ella quien llevaba el hogar, toda vez que le ayudaba a una prima a los quehaceres de la casa.

Por su parte, el señor Luis Alfonso Gutiérrez afirmó que siempre se ha dedicado a la jardinería, que para la época del fallecimiento de su hijo Andrés Felipe, era este quien asumía los gastos del hogar, concretados en el mercadito, ayudaba a los niños, manifestó que cuando trabajaba también ayudaba, que salieron de Ebejico desplazados, porque después del fallecimiento de su hijo los amenazaron, que recibe ayuda de \$500.000 cada 5 o 6 meses, encontrándose incluido en el registro único de víctimas, que antes del fallecimiento de su hijo unas veces se ganaba \$20.000, otras \$30.000, que su hijo no tenía trabajo estable, que para ese tiempo su otro hijo José Daniel trabajaba en un restaurante y les ayudaba cada mes con mercadito, les giraba de \$150.000 a \$200.000, que cuando su hijo Andrés Felipe no aportaba él se iba para Medellín a rebuscarse lo del mercado, se quedaba 8 o 15 días trabajando y mercaba las cositas que podía, que su esposa nunca ha laborado, siempre ha sido ama de casa y que no pagaban servicios públicos.

De los dichos de los demandantes, se tiene que para la fecha del fallecimiento de Andrés Felipe Gutiérrez, el grupo familiar no pagaba arriendo, no pagaba servicios públicos, siendo la alimentación el único gasto que debían procurarse, presentándose contradicción en las declaraciones, en tanto que la señora María Cecilia, manifiesta que dicha alimentación era proporcionada por su

compañero permanente, sus hijos Andrés Felipe y José Daniel, además de reconocer que ella también aportaba para dicho fin, mientras que el señor Luis Alfonso Gutiérrez, inicialmente manifestó que esa obligación era asumida por Andrés Felipe, y posteriormente reconoció que él también aportaba y que recibían ayuda de otro hijo José Daniel, quien aportaba entre \$150.000 y \$200.000, sin que en ningún momento se indique a cuanto ascendía el aporte de Andrés Felipe.

Llama la atención de la Sala, que el señor Luis Alfonso Gutiérrez, indique que su esposa nunca ha laborado, que siempre ha sido ama de casa, cuando precisamente la misma María Cecilia manifestó que le ayudaba a una prima a los quehaceres de la casa y de ahí obtenía recursos para la comida, aporte que es completamente desconocido por el actor.

La parte actora, presentó como testigos a los señores Jhon Anderson Orrego Seguro y Martha Sánchez de Quirama. El primero de ellos, indicó ser amigo del causante por espacio de tres años más o menos y ser el compañero permanente de una de las hermanas del causante, afirmó que él le ayudaba a Andrés Felipe con días de trabajo, que cuando trabajaba con él Andrés le depositaba \$100.000 o \$200.000 a los padres para comprar mercado, que para la fecha del fallecimiento Andrés Felipe estaba en el pueblo, porque en esos días él se fue para donde los papás, adujo que doña María Cecilia siempre ha sido ama de casa y don Alfonso ha trabajado por días, que más que todo a fin de año, que los ingresos económicos del hogar de los demandantes, lo que sabe, era lo que les mandaba Andrés, que los gastos del hogar eran más que todo la comida y el pago de los servicios y manifestó que no sabe si José Daniel ayudaba al hogar.

La señora Martha Sánchez de Quirama, manifestó que es amiga de los demandantes, que fueron vecinos hace muchos años, hasta que los



demandantes se fueron para Ebejico, que el demandante siempre se ha dedicado al arreglo de prados a pintar casas, que el señor Luis Alfonso siempre le ha trabajado lo de jardinería y cuando él no podía era su hijo Andrés Felipe quien hacía los trabajitos, que por ahí cada 15 o 20 días le hacían los arreglos, que les pagaba un poquito menos del mínimo, que al momento de morir Andrés Felipe, este vivía con la mamá, el papá y sus hermanos, que él trabajaba y le aportaba a los papás, que Luis Alfonso le contaba que su hijo les ayudaba, que no sabe si los hermanos mayores de edad trabajaban, que no sabe si Andrés Felipe trabajaba para una empresa o como independiente, que solo sabe lo que venía a hacerle a su casa, que ella también les ayudaba con mercado, por ahí cada 15 días les colaboraba con alguna cosita, que no sabe cuál es el valor del mercado de don Alfonso y que no sabe cuánto pagaban de servicios públicos.

Del análisis de la prueba testimonial no es posible concluir que en efecto el aporte que eventualmente daba el señor Andrés Felipe a sus padres, fuera determinante para generar una dependencia económica, pues no se logra establecer cuál era el ingreso que podía recibir el causante, siendo unánimes las declaraciones en que el trabajo de Andrés Felipe no era constante, adicionalmente, tampoco se pudo establecer a cuanto ascendía el aporte que era suministrado por el causante a sus padres, quedando en evidencia si, que lo que se aportaba era para la alimentación, la cual, como se indicó anteriormente también era suministrada por el demandante, José Daniel, la señora María Cecilia e incluso recibían presuntamente ayuda de terceros como la testigo Martha Sánchez de Quirama, quien afirmó que cada 15 días les colaboraba con algo para el mercado.

Debe señalarse que, al efectuar el análisis de la prueba, son varias los aspectos que sobre los cuales existen inconsistencias, entre ellas, no es claro las circunstancias en que se produce el deceso del afiliado, destacando que los

dichos de los demandantes apuntan a que ocurrió cuando su hijo se encontraba laborando, aunque para esa data no se acredita la existencia de un vínculo laboral pues no tenía afiliación en pensiones vigente, en igual sentido, no existe certeza de que el causante viviera con sus padres para la fecha del suceso, pues de la declaración del señor Jhon Anderson Orrego Seguro, se desprende que Andrés Felipe vivía en Medellín, pues afirma que él les hacía giros a sus padres, que incluso lo acompañó en varias oportunidades, que Andrés hacía mercado en Medellín y se lo llevaba a sus padres al pueblo, manifestando que por los días del fallecimiento Andrés se había ido para Ebejico y finalmente, llama la atención que los testigos manifiesten conocer puntualmente de la ayuda que daba Andrés Felipe, pero no conozcan si algún otro hermano del causante realizaba algún aporte, incluso que manifiesten que no saben cuánto pagan los demandantes por servicios públicos, cuando estos informaron que no pagan servicios .

En adición a lo anterior, resulta importante señalar que no quedó acreditada la capacidad económica del causante, pues no tenía trabajo estable, de la historia laboral se desprende que en el año 2016 solo laboró 14 días en enero y en 2017 1 día en enero, resaltando que si bien, puedo estar inmerso en la informalidad, ello no quedó demostrado en el proceso, pues no se acreditó en que periodos trabajaba y que ingresos podía obtener, así como tampoco cuales eran sus gastos y cuál era el aporte suministrado a sus padres, teniendo en cuenta que al parecer no vivía con ellos.

Aclara la Sala, que la existencia del aporte del otro hijo de los accionantes y el aporte mismo de los pretenses, en principio, no desvirtuaría la dependencia económica parcial exigida por el legislador, sino fuera porque la prueba allegada por la activa no da la información que se requiere para determinar la existencia real del aporte del hijo y el carácter subordinante del mismo, respecto a los demás ingresos.

Debe señalarse que la dependencia económica, supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido por parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia y si bien, no es requisito sine qua non, determinar el monto del aporte, ello resulta necesario cuando, como en este caso, no se acredita la capacidad económica del causante, y además se declara que al aporte del causante, se suman otros ingresos propios y de terceros.

Colofón de lo anterior, analizada la prueba en su conjunto no es posible establecer la dependencia económica parcial, que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y en razón de ello, la providencia de primera instancia debe ser REVOCADA.

Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas a los accionantes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, atendiendo a que se manifestó que tienen la condición de desplazados, lo anterior, bajo el postulado de buena fe. Las costas de primera instancia a cargo de los accionantes, las cuales deberán ser fijadas por la funcionaria de primer grado.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

### **FALLA:**

1.- Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de diciembre del 2022, en el

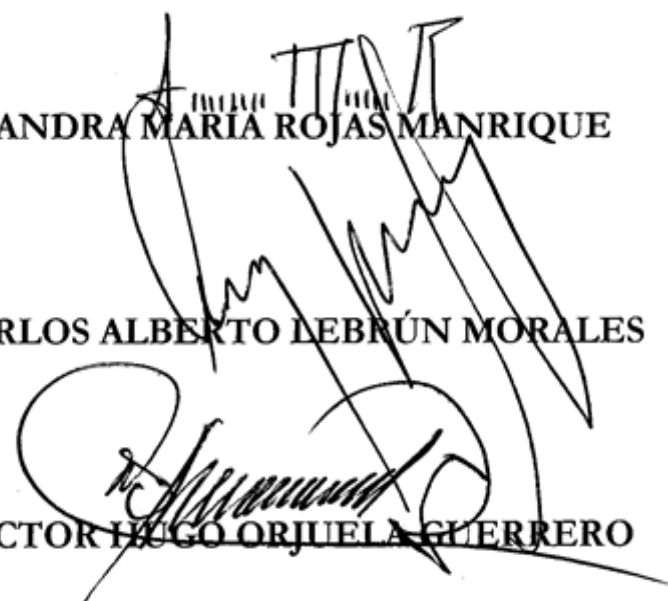
proceso ordinario instaurado por los señores LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ y MARÍA CECILIA GUERRA MUÑOZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., y en su lugar, se ABSUELVE, a PORVENIR S.A., de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra.

2.- Sin **COSTAS** en esta instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO